





DISTINCIÓN POR GÉNERO Y DESARROLLO

6



INTRODUCCIÓN

El decenio de 1970 fue testigo del resurgimiento de un movimiento internacional de mujeres—fomentado a su vez por las diversas luchas de las mujeres en numerosos países—que convergió en torno al Año Internacional de la Mujer (1975) y las actividades del Decenio de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (1976–1985). Sin embargo, tardó mucho tiempo para que la «distinción por género» se convirtiera en una prioridad de la comunidad internacional de desarrollo y de los organismos donadores. Ello afectó la capacidad del Instituto para movilizar fondos para la investigación sobre cuestiones relacionados con el género, aunque varios proyectos tuvieron componentes en los que se examinó la situación de las mujeres. A principios del decenio de 1990 la distinción por género se convirtió en un campo principal de trabajo, incluyendo varios proyectos en los que se atendieron los temas de gobernabilidad y medios de vida.

LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE GÉNERO

A través de su investigación, UNRISD ha tratado de destacar las formas como las relaciones de poder y las desigualdades basadas en el género están siendo incorporadas constantemente, desafiadas e incorporadas de nuevo, en diversos entornos institucionales, desde el hogar hasta el mercado nacional y mundial, desde las organizaciones y movimientos sociales basados en la comunidad hasta la administración pública, las legislaturas nacionales y las organizaciones internacionales.

Los años 70 y 80 fueron testigos de un resurgimiento del interés en las «historias ocultas» del activismo femenino en todo el mundo, impugnando el punto de vista de que las mujeres eran espectadoras pasivas en la construcción de la historia. Irónicamente, la ausencia de las mujeres en la corriente historiográfica principal parecía repetirse en las obras sobre movimientos populares, en gran parte de las cuales, se tenía poco que decir acerca del activismo político de la gran mayoría de las mujeres, sobre todo de aquéllas que están presentes al nivel de las bases.

El activismo de las mujeres

Fue dentro de este contexto que el proyecto de UNRISD sobre Participación popular (véase capítulo 5), se propuso explorar la participación de las

mujeres en la acción colectiva y en los movimientos sociales en países seleccionados de América Latina y de Asia.

Los estudios de caso abarcaron la movilización de las mujeres para denunciar violaciones a los derechos humanos; su participación en las asociaciones vecinales, en cocinas comunales, en clubes de madres y demás para exigir la prestación estatal de servicios urbanos y para defender sus niveles de vida. Se incluyeron también estudios sobre los intentos de las mujeres activistas en sindicatos, organizaciones campesinas y movimientos indígenas para establecer organismos autónomos donde los intereses específicos de las mujeres (que rutinariamente son excluidos en las organizaciones o movimientos preponderantes), pudieran ser expresados y debatidos (Jelin 1987; Omvedt 1986). Mientras que en algunas instancias, las protagonistas mismas definían sus acciones colectivas como «feministas», desafiando abiertamente la condición de subordinación de las mujeres, en otras se les alentaba a que participaran apelando a su identidad como esposas o amas de casa o madres de familia, con el objetivo de defender los niveles de vida de sus familias y de sus comunidades.

En todos los casos, la acción y las metas de las mujeres constituían una forma nueva de relacionar lo que es «político» con lo que es «social». Al alentar un debate público sobre problemas relacionados tradicionalmente con el ámbito privado o social—como la tutela matrimonial, la violencia

doméstica, los derechos de reproducción, y la reproducción social no basada en el mercado—el activismo de las mujeres estaba cambiando el límite de los asuntos que se consideraban como públicos y políticos.

Pero, ¿fue este nuevo activismo—parte del cual estaba en aparente acuerdo con el orden tradicional del género—capaz de desestabilizar las jerarquías sobre género profundamente arraigadas y reducir la subordinación de las mujeres? De acuerdo con los testimonios orales registrados por los investigadores, muchas de las mujeres que participaban en las cocinas comunales o en las asociaciones vecinales—actividades que eran consideradas extensiones de su papel doméstico—veían ese tipo de participación y el aprendizaje así obtenido como la antítesis de su aislamiento en el hogar. En algunas instancias, la movilización de las mujeres en torno a sus intereses prácticos pareció haber desencadenado procesos de transformación en los que se ponían en entredicho algunas de las estructuras de desigualdad basada en el género. Pero dichos resultados estaban lejos de estar garantizados. Dependían en gran parte de los cambios en las relaciones de poder y en la disertación política que estaba teniendo lugar en estas luchas colectivas. Muchas de las preguntas que se plantearon en esos estudios primigenios resurgieron de nuevo, más de diez años después, en el contexto de la reestructuración neoliberal del sector social, cuando las organizaciones y las ONG de mujeres se veían obligadas cada vez más a asumir la responsabilidad

por la procuración de bienestar que el Estado ya no estaba dispuesto o no era capaz de asumir.

Integración de género

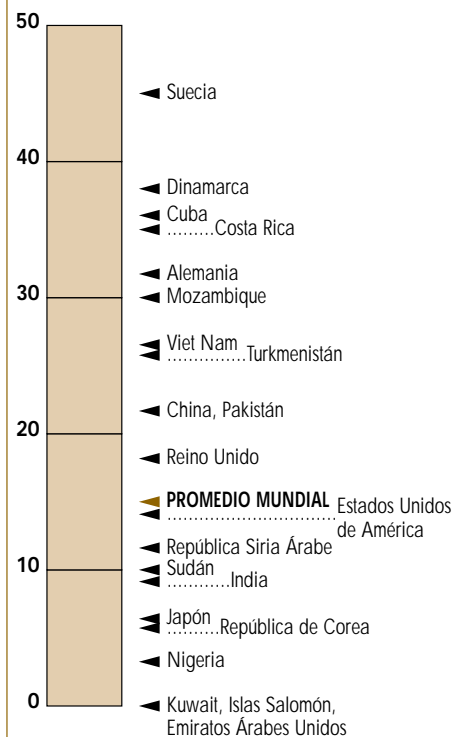
A mediados del decenio de 1980, los movimientos nacionales feministas dirigían cada vez más su atención hacia las instituciones públicas claves que influyen en la vida de las mujeres, para lo cual se inspiraron en las luchas populares de las propias mujeres para cambiar las organizaciones dominadas por los hombres. El interés de las feministas por la transformación de las instituciones

estatales y la modificación de sus procesos fue legitimado más adelante por las actividades del sistema de las Naciones Unidas. La demanda de políticas para atender las necesidades de las mujeres en el desarrollo, a menudo formaba parte de un proyecto más amplio de acceso a las instituciones encargadas de formular e aplicar políticas; proyecto que, en términos generales, se conoce como la incorporación de la perspectiva de género. La más importante de esas instituciones ha sido y sigue siendo el Estado, aunque en las dos décadas pasadas su papel haya sido seriamente cuestionado y su capacidad para gobernar haya sido erosionada (ver capítulos 2 y 5).



Las transiciones de los regímenes autoritarios proporcionaron oportunidades valiosas a algunos de los sectores del movimiento femenino para tratar de influir en la formulación y ejecución de políticas. Una forma de hacerlo fue estableciendo «mecanismos especializados para mujeres», tales como departamentos, ministerios u oficinas para la mujer, dentro de la administración pública. En un estudio comparativo de seis países sobre los mecanismos de mujeres, emprendido por UNRISD en 1993-1994, como parte del proyecto Cooperación técnica y vidas de mujeres: Integración de la distinción por género en las políticas de desarrollo, se confirmó la importancia de los cambios en el régimen político para institucionalizar el interés en la distinción por género dentro del Estado (Goetz 1995). Sin embargo, los aparatos de mujeres constantemente sufren de varios defectos: escasez crónica de personal, falta de recursos, repercusión reducida, mandato incierto, falta de conciencia del personal gubernamental sobre cuestiones relacionados con el género (y falta de compromiso para resolverlos), así como falta de la legitimidad que la igualdad en materia de género pareciera tener dentro de la administración pública, todo lo cual obstaculizó su labor. Un campo de la política en el que se mantuvo una oposición especial a las incursiones feministas fue el de la toma de decisiones macroeconómicas. En las organizaciones multilaterales que fueron examinadas por UNRISD se destacaron restricciones similares (Razavi y Miller 1995b).

GRÁFICA 6.1
LAS MUJERES EN LOS
PARLAMENTOS NACIONALES



■ Porcentaje de escaños ocupados por mujeres en la diputación unicameral o en la cámara baja en países seleccionados, y su promedio mundial.

Fuente: UIP 2003.

Si se desea que la defensa a favor de las políticas en materia de género llegue a afianzarse al interior de la burocracia estatal, se necesita reforzarla con una base política efectiva fuera del Estado. Sin embargo, ya se ha demostrado la dificultad para establecer o aprovechar una relación constante entre las entidades de mujeres en la administración pública y los grupos de interés femeninos de la sociedad civil. Dada la historia de cooptación de grupos de mujeres por parte de los partidos políticos dominantes y del Estado, además de la notoriedad de las esposas o parientes femeninas de los líderes nacionales en posiciones políticas elevadas, algunas agrupaciones de mujeres son cautelosas ante los mecanismos de mujeres vinculadas a algún partido, así como a la política predominante. Y esta poca disposición para llegar a asociarse demasiado estrechamente con los aparatos de mujeres dificulta el que haya una co-laboración estratégica entre el Estado y la base de mujeres (Miller y Razavi 1998).



JUSTICIA Y DERECHOS EN MATERIA DE GÉNERO

Las estrategias para integrar las cuestiones de género han sido parte de un intento más amplio que llevan a cabo las partidarias de la distinción por género para democratizar las instituciones políticas, pugnando por que se rindan cuentas a las ciudadanas. Estos esfuerzos han coincidido con otras modificaciones en el programa de política internacional desde los años 90, en los cuales se ha insistido en el ejercicio de la democracia y en la promoción de un desarrollo basado en los derechos. En este ambiente político, los movimientos sociales femeninos se han encontrado con gobiernos y legislaturas más dispuestos a responder a algunas de sus demandas. En una gama amplia de países se han implantado leyes que reconocen los derechos de las mujeres en áreas críticas tales como divorcio, custodia de los hijos, violencia doméstica y derechos de reproducción. Sin embargo, el éxito en el planteamiento de estos controvertidos

«EL DESARROLLO HA SIDO DOMINADO EN DISTINTOS PERÍODOS POR IDEAS DIFERENTES. DADO LA DIVERSIDAD DEL MUNDO Y LA RAPIDEZ DEL CAMBIO, ASÍ ES COMO DEBERÍA DE SER. SIN EMBARGO, SI SE PRETENDE QUE LOS ESFUERZOS POR EL DESARROLLO TRANSFORMEN AL MUNDO PARA MEJORARLO, DEBEN SUSTENTARSE EN LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO DE LA FORMA COMO OPERAN LAS FUERZAS DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD. DESDE SU TRABAJO INICIAL SOBRE PARTICIPACIÓN E INDICADORES SOCIALES HASTA SU INTERÉS RECIENTE EN LOS ASUNTOS EN MATERIA DE GÉNERO,

GOBERNABILIDAD
Y MUNDIALIZACIÓN,
UNRISD SE HA
COMPROMETIDO CON
LOS TEMAS CLAVES
DE LA ACTUALIDAD,
PRECISAMENTE DESDE
ESE PUNTO DE VISTA.
EN UNA ÉPOCA CUANDO
LAS IDEAS SOBRE
SOLIDARIDAD,
COMPROMISO Y
MUTUALIDAD DE
INTERESES HAN SIDO
SOMETIDAS A UN
ATAQUE CONSTANTE,
LA VISIÓN DE UNRISD
SOBRE LA JUSTICIA
SOCIAL CONTINÚA
SIENDO MÁS RELEVANTE
Y URGENTE QUE
NUNCA.»

NAILA KABEER,
INVESTIGADORA
ASOCIADA EN EL EQUIPO
SOBRE POBREZA
Y POLÍTICA SOCIAL
DEL INSTITUTO DE
ESTUDIOS DEL DESARROLLO
DEL REINO UNIDO

problemas, y aun tal vez en cuanto a legislar sobre ellos, no ha sido igualado por un mejoramiento en la calidad de vida de la mayoría de las mujeres. Los años 80 y 90 se distinguieron por las desigualdades crecientes en el salario y por un aumento súbito de la pobreza, mientras que el papel del Estado en la procuración y prestación de bienestar era seriamente cuestionado y socavado.

Como parte de su aportación a Beijing+5, en UNRISD se reflexionó sobre los resultados ambientales del decenio de 1990, así como sobre el significado que se les ha dado a los derechos y a la democracia en la política internacional de desarrollo (Molyneux y Razavi 2002). En la investigación se examinaron tres conjuntos de problemas: las contradicciones entre las políticas económicas neoliberales y las políticas sociales por un lado, y el pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de las mujeres, por el otro; el grado hasta donde los Estados y los movimientos sociales que aseguran ser democráticos han facilitado la presencia de las mujeres en la política y hasta dónde han respondido a sus intereses manifiestos; y finalmente, las contradicciones entre política cultural (y políticas de identidad) y el programa en pro de la igualdad de género. Varias conclusiones se derivaron de dicho trabajo:

Primera, con la investigación se encontró que las políticas neoliberales han transformado el entorno de la política pública de manera perjudicial para las mujeres, dadas la naturaleza recesiva del programa de política macroeconómica, el aumento de

la inestabilidad económica, y la reducción en la capacidad del Estado para conseguir recursos para redistribución y protección social. En segundo lugar, aunque las mujeres se han convertido en una fuerza política importante en muchos países, su participación política no está suficientemente institucionalizada ni afianzada. Cuando la capacidad de las mujeres en la sociedad civil ha sido insuficiente—para actuar como un sector que obligue al Estado o al partido dominante a rendir cuentas—y cuando su inclusión en política ha sido concedida como un favor—más que como un derecho—por parte de los Estados o de los partidos con democracia interna endeble; las partidarias de la distinción por género no han sido capaces de proponer programas para un cambio radical. En tercer lugar, la cuestión en pro de los derechos culturales de la minoría (o los derechos de grupo) ha sido planteada insistentemente en años recientes, y se han decretado leyes para sustentar ese tipo de derechos (véase casilla 6.1). Sin embargo, siempre existe el peligro de que los reclamos culturales sean enmarcados en una interpretación monolítica de la cultura que exagere el consenso interno. Con ese tipo de interpretaciones a menudo se tergiversan las costumbres sociales que respaldan la dominación masculina, considerándolas como procedimientos que «la sociedad» quiere mantener. La mejor protección contra esta situación es la promoción de planteamientos alternativos, con interpretaciones matizadas sobre la relación entre la igualdad cultural y la sexual, contribuyendo así a que se les entienda mejor (Phillips 2002).

Casilla 6.1—La lucha de las mujeres indígenas por la justicia en Chiapas, México

Como resultado de una presión persistente de los movimientos sociales tanto nacionales como del exterior, la Constitución Mexicana fue enmendada en 1992 a fin de reconocer la composición multicultural de la nación. Muchas personas consideraron que ésta fue una victoria del movimiento indígena mexicano, así como un paso hacia una nueva relación entre los pueblos indígenas y el estado-nación. Pero este cambio aparente hacia la aceptación oficial del multiculturalismo no ha estado libre de contradicciones. En algunos casos, la legislación pro indigenista—en la cual se reconoce el derecho de la población indígena a sus propias normas y procedimientos—de hecho ha funcionado para desventaja de los grupos débiles y marginados al interior de las propias comunidades indígenas. Por ejemplo, en algunas comunidades de México el derecho consuetudinario, con pocas excepciones, no reconoce los derechos de las mujeres a la tierra, a la vez que las instituciones políticas consuetudinarias excluyen a las mujeres junto con las minorías religiosas del ejercicio de cargos políticos. A los hombres se les permite «disciplinar» a golpes a su esposa y a sus hijos; y los actos de violencia contra las mujeres, aun si resultan fatales para ellas, pueden ser condonados. ¿Cómo, entonces, pueden ser reconciliados los reclamos y derechos culturales con los derechos humanos de las mujeres?

Los numerosos conflictos entre los derechos de la mujer y el derecho consuetudinario en cuanto a la violencia doméstica, el rapto de novia y la violación no son de sorprender. En especial, las mujeres indígenas afrontan ahora la tarea dual

de defender su derecho a sus propias culturas vis a vis el Estado mexicano, mientras que ponen en tela de juicio los conceptos esencialistas y estáticos de la cultura y la tradición dentro del movimiento indígena que tienen implicaciones negativas para la realización plena de los derechos de la mujer.

En Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conocido popularmente como los zapatistas, ha tratado de reconciliar los derechos humanos de la mujer y los derechos culturales indígenas. Los zapatistas son partidarios de formas de resolución de conflicto que se apoyen tanto en el derecho nacional como en el internacional. También promueven con firmeza «tradiciones nuevas» en las cuales las mujeres estén presentes más activamente y en igualdad de condiciones con el hombre. Las declaraciones de las mujeres indígenas en talleres y entrevistas, junto con los documentos de varios de los congresos y encuentros desde que ocurriera el levantamiento zapatista, muestran un cuadro cambiante y dinámico de su cultura. Un sector importante de las mujeres indígenas, encabezado por militantes zapatistas, ha decidido luchar en diversos frentes. Están cabildeando para reformar la constitución a fin de que se reconozca el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y, al mismo tiempo, están pugnando por que se acepte una perspectiva inclusiva en materia de género como parte de sus proyectos de autonomía. Sus esfuerzos tienen como meta reformular la tradición partiendo de una cultura de equidad y justicia.

Fuente: Hernández Castillo 2002.

GÉNERO Y MEDIOS DE VIDA

¿Hasta dónde los avances en participación y derechos de la mujer, junto con su surgimiento como una fuerza política evidente en las tres últimas décadas, se han traducido en mejoramiento de su bienestar y medios de vida más seguros? En varios proyectos de UNRISD se ha examinado la repercusión de los procesos y políticas de desarrollo en las mujeres, notablemente en relación con el cambio agrario y con la manufactura dirigida hacia la exportación. El estudio sobre los roles y condiciones de vida de la mujer también ha formado parte de otros programas de investigación de UNRISD, por ejemplo, sobre refugiados y medio ambiente (véanse capítulos 3 y 4).

Género y cambio agrario

A finales del decenio de 1970 la investigación comenzó sobre Repercusión de los cambios socioeconómicos en la mujer. Las restricciones financieras obligaron a que esta investigación se limitara a África Occidental, pero el trabajo de campo que se llevó a cabo en Burkina Faso, Côte d'Ivoire y Senegal dio resultados importantes. La modernización y comercialización de la agricultura estaban modificando la división del trabajo basada en el género de manera fundamental, pero rara vez de modo que beneficiara a las mujeres. Las mujeres rurales estaban bajo presión para que intensificaran sus

cargas de trabajo en las granjas familiares dedicadas a cultivos comerciales, lo cual estaba reduciendo el tiempo que ellas podían dedicar a su propia labor agrícola independiente. Esto disminuyó la productividad de las granjas de las mujeres en detrimento de la cantidad de productos que ellas podrían aprovechar para su propio aprovisionamiento y/o para comercialización (Savané 1986).

En contraste con una gran parte de la literatura de esa época sobre la mujer en el desarrollo (MED)—la cual fracasó en cuanto al cuestionamiento de los términos desfavorables bajo los que las mujeres eran integradas al proceso de desarrollo—este primer estudio de UNRISD estaba sustentado en el análisis de las fuerzas económicas desencadenadas por las políticas nacionales y mundiales. Las relaciones desiguales en materia de género en el campo africano, se estaban repitiendo y reforzando a través de la política económica que daba prioridad a la comercialización de la agricultura y a la producción intensiva de productos primarios para el mercado mundial.

A principios del decenio de 1990, la relación entre género y cambio agrario, recibió atención renovada por parte de UNRISD, a través de un nuevo proyecto de investigación denominado Cooperación técnica y vidas de mujeres: Integración de la distinción por género en la política de desarrollo, centrado exclusivamente en las dimensiones del desarrollo relacionadas con el género (Razavi y Miller 1995a). Uno de los componentes de la

investigación consistió en examinar, en el contexto agrario, la forma como la reestructuración económica estaba repercutiendo en los medios de vida relacionados con la distinción por género, en Asia y en el África Subsahariana. Con la investigación en Viet Nam se exploraron las formas como el género afectaba la relación entre diversificación de los medios de vida y los objetivos duales del gobierno de reducir la pobreza y fomentar el crecimiento económico; mientras que en Uganda, se sometía a serio escrutinio la promoción de la agricultura no tradicional de cultivos de exportación, pieza clave de la estrategia macroeconómica del país (Kabeer y Van Anh 2000; Kasente et al. 2000).

La liberalización agrícola—uno de los principios básicos de los programas de ajuste estructural—tenía significados y resultados muy diferentes en esos dos entornos sociales mencionados. Implicaba riesgos diferentes, tanto en términos de seguridad alimentaria como en lo que se refiere a la intensificación del

trabajo no remunerado de las mujeres. Las relaciones de género fueron fundamentales para explicar las desventajas a que se enfrentaban las mujeres. Ellas tenían responsabilidad abrumadora en cuanto a la reproducción hogareña, y restricciones específicamente relacionadas con el género que afectaban su acceso a los recursos y a las oportunidades.

Estos hallazgos fueron confirmados por el análisis que hiciera el Instituto sobre la pobreza desde



una perspectiva de género, lo que llamó la atención sobre la forma como las identidades de género condicionan el acceso de las mujeres a los recursos materiales y de otro tipo, y analizar sus diversas respuestas ante las oportunidades y las restricciones correspondientes. Además de comparar los resultados en términos de bienestar para hombres y mujeres, los análisis sobre pobreza deben centrarse en los procesos de empobrecimiento que hay detrás de dichos resultados, debido a que éste es el nivel de análisis en el cual las relaciones entre género y pobreza pueden determinarse de manera más significativa (Razavi 1999b).

En una época cuando se estaba poniendo creciente énfasis en la seguridad de los derechos de propiedad, a través de la titulación agraria equitativa en términos de género como una solución al acceso desigual de las mujeres a la tierra y como un remedio a la pobreza femenina, UNRISD hizo notar que el acceso de las mujeres a la tierra estaba siendo impulsado por fuerzas, mecanismos e historias institucionales diferentes, y que el hecho de considerar las restricciones a la producción agrícola de las mujeres en términos de su falta de acceso a la tierra no siempre ayudaba a entender el problema (Razavi 2003). Tampoco ayudaba tratar de aplicar las prescripciones de política adecuadas al contexto específico de un país en desarrollo a otro con condiciones relativamente diferentes. Por ejemplo, el proyecto Cambio agrario, distinción por género y derechos agrarios reveló que en muchas partes del África Subsahariana, no es la falta de

acceso a la tierra lo que impide a las pequeñas propietarias progresar, aunque éste sea el factor que más a menudo se enfatiza. Lo que aparentemente les falta a las mujeres pequeñas propietarias en muchos de estos contextos son los recursos para trabajar la tierra, así como el apoyo institucional y de infraestructura que les permitiría comercializar sus productos agrícolas (Whitehead y Tsikata 2003).

La investigación que UNRISD realizó en Uzbekistán documentó el incremento en el número de mujeres que demandan tierra, en un contexto donde las ocupaciones no agrícolas como la enseñanza, los servicios de salud y las industrias rurales—que aportaban oportunidades significativas de empleo a las mujeres del medio rural—prácticamente se han agotado y la población rural ha tenido que regresar al trabajo en el hogar y en las parcelas subsidiarias para subsistir. Así, parece que la sed de tierra de las mujeres refleja tanto el deseo de restablecer los términos de su contrato social anterior con las empresas colectivas (uno de los cuales era incluir el acceso a predios subsidiarios), por un lado, como su desesperación ante lo reducido de las opciones, por el otro (Kandiyoti 2003).

La investigación en Brasil, Sudáfrica y Tanzania reveló que el interés de las mujeres en la posesión de tierras se había politizado en el decenio de 1990. (Deere 2003; Walker 2003, Tsikata 2003). Pero aun cuando las aperturas democráticas hayan revitalizado el debate nacional sobre reforma agraria y

hayan permitido que las partidarias de las mujeres elevaran más su voz, la falta de un papel activo por parte del Estado no es un buen presagio para las mujeres. En Sudáfrica la insistencia del gobierno en un programa de reforma agraria que responda primordialmente a demandas específicas de tierras, ha disminuido su capacidad para proporcionar ayuda a las mujeres del campo. Tampoco hay razón para creer que en ese contexto los procesos de delegación y descentralización de poder, a menudo recomendados como maneras de democratizar las instituciones de tenencia agraria o de desarrollar mercados de tierra eficientes, necesariamente aumenten la equidad y la justicia desde la perspectiva de género en el acceso a los recursos. Estas tendencias provocan señales de advertencia sobre las configuraciones de poder al nivel local, así como sobre los obstáculos políticos e institucionales que impiden que haya mayor equidad en el acceso a los recursos, incluida la tierra (Whitehead y Tsikata 2003).

Feminización de la manufactura dirigida hacia la exportación

Una tendencia conflictiva en las últimas dos décadas ha sido el surgimiento de las mujeres como la fuerza de trabajo predominante en las industrias manufactureras del mundo en desarrollo cuya producción se dirige hacia la exportación. Los entusiasmas del libre mercado afirman que anteriormente,

en los países en desarrollo, las mujeres eran víctimas de las «distorsiones» del mercado laboral (aludiendo a las regulaciones en favor de los trabajadores); que ellas se han beneficiado con mercados laborales más «flexibles», y que podrían «ganar» con la mundialización si tan sólo los gobiernos de los países en desarrollo liberalizaran plenamente su comercio exterior. También hay una cantidad significativa de investigación feminista a nivel micro que documenta las implicaciones empoderantes que tiene el trabajo remunerado de las mujeres. Las mujeres jóvenes que trabajan en fábricas orientadas hacia la exportación a menudo expresan su preferencia por este tipo de trabajo, comparado con otras opciones (tales como el trabajo doméstico y el trabajo no remunerado en la agricultura familiar). El hecho que las mujeres sean capaces de ganar un salario ha dado a algunas de ellas una herramienta para impugnar el control de los padres y patriarcal sobre sus vidas. Sin embargo, estos enfoques favorables también tienen sus críticos acérrimos, quienes presentan escenarios en los que se ubica a las mujeres que trabajan en talleres de las cadenas de producción mundial, junto con los niños trabajadores, como víctimas de la mundialización neoliberal. En años recientes UNRISD ha llevado a cabo una investigación extensiva en este campo (Miller y Vivian 2002; Razavi 1999a; Pearson et al. 2003). La evidencia que se deriva de este proyecto proporciona una imagen matizada y más compleja que la que suele presentarse en estos debates polarizados (véase casilla 6.2).

Una de las cuestiones importantes que se derivan del análisis de esos datos es que las mujeres pueden ponderar la contratación laboral de manera diferente en algunos aspectos de como lo hacen los hombres. Es esencial reconocer que las mujeres pueden compensar los salarios bajos (y condiciones deficientes de trabajo) con el hecho de que dichos salarios les permiten reducir su dependencia y subordinación en los ámbitos familiar y conyugal.

El segundo tema crítico es que el aumento de la participación de las mujeres en la economía mundial ha coincidido con una desregulación de las condiciones laborales y disminución de las prestaciones relacionadas con el trabajo. Esto desafía seriamente el punto de vista de que una mayor participación de los países en los mercados mundiales coloca a las mujeres en una situación en la que pueden ejercer sus derechos económicos y tener acceso a prestaciones gracias a la actividad del mercado laboral. En países tan diversos como Chile y Polonia, el abandono de los principios universales de la previsión social, junto con la privatización de la seguridad social, han dado un duro golpe a las prestaciones de las mujeres. En sistemas donde los beneficios se calculan sobre la base de las contribuciones al mercado laboral, las mujeres tienden a estar en desventaja: sus ingresos por lo general son más bajos y sus trayectorias de empleo más cortas, y se interrumpen más que las de los hombres, dado su trabajo no remunerado de atender a la familia (al cual no se le asigna valor de

mercado). Las prestaciones basadas en el mercado están por lo tanto, inherentemente sesgadas hacia el sexo masculino.

Las formas democráticas de normatividad social, que los Estados se encargan de hacer cumplir, pueden contribuir a que los mercados tengan menos riesgo y a que se promueva la solidaridad social. Sin embargo, las normas reflejan con frecuencia el equilibrio de las fuerzas políticas de la sociedad. Los modelos de seguridad social que proporcionan beneficios a aquellos trabajadores que están en el mercado laboral formal no discriminan directamente a las mujeres; empero ese tipo de modelos coloca indirectamente a muchas de ellas en desventaja, revelando lo que ha sido identificado como un «sesgo masculino» en la política social. Se puede atender mejor a los intereses de las mujeres con formas de normatividad en las que se evalúen las aportaciones y necesidades diferentes de las mujeres, en vez de las formas que no diferencian entre ciudadanos y ciudadanas. La medida en que las políticas sociales puedan favorecer los intereses de las mujeres es un reflejo de las decisiones políticas, que a su vez dependen de la fuerza con que ellas exijan justicia, así como de los marcos de referencia analíticos e institucionales que faciliten el debate público y la selección de políticas. Algunos de estos problemas están siendo investigados ahora como parte del nuevo proyecto de UNRISD sobre Género y política social (véase casilla 2.3).

Casilla 6.2—Empleo para mujeres en actividades dirigidas hacia la exportación

Para mediados del decenio de 1990, había un consenso cada vez mayor de que el aumento en el comercio internacional de manufacturas era, en su conjunto, favorable a la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo remunerada.

Sin embargo el cuadro no es del todo positivo:

- > El trabajo en las fábricas a menudo es perjudicial para la salud de las mujeres, debido al uso de sustancias carcinógenas y las largas jornadas. El trabajo tiende a ser repetitivo, monótono y rápido, dejando a las jóvenes trabajadoras prematuramente «acabadas».
- > Las mujeres trabajadoras ocupan los peldaños más bajos en las manufacturas del vestido y de la electrónica. Frecuentemente son reclutadas como trabajadoras sin habilidad, dada su escasa capacitación, y se les ofrecen perspectivas limitadas de promoción.

Más aún, al nivel macro, varias de las tendencias más recientes suscitan preguntas acerca de la viabilidad de la estrategia orientada hacia la exportación.

- > Los patrones de empleo en algunos subsectores de manufactura orientada hacia la exportación han sido desfeminizados en la medida en que la producción para exportación se ha vuelto más técnica y de utilización intensiva de capital.
- > Aquellos países que aceleraron su producción de bienes manufacturados para exportación enfrentaron términos de intercambio cada vez más desfavorables entre 1985 y 1995.
- > En la medida en que las importaciones baratas han remplazado los bienes manufacturados nacionales, las posibilidades de empleo para las mujeres en el sector manufacturero se han reducido.

Fuente: Miller y Vivian 2002; Pearson et al. 2003.

La investigación de UNRISD sobre las dimensiones de la distinción por género en el desarrollo, ha mostrado claramente que los progresos en la participación política de las mujeres suceden al mismo tiempo que se consolida un modelo de desarrollo sustentado en el mercado, el cual les niega a vastos grupos de mujeres la oportunidad de reclamar sus prestaciones y medios de vida más seguros. El período de ascendencia liberal ha generado algunos avances limitados en el reconocimiento de los derechos formales de las mujeres, pero sin que haya habido un entorno de política favorable para que esos derechos sean significativos o sustanciales (Molyneux y Razavi 2002). La investigación ha permitido mostrar también que el logro de la igualdad en materia de género no puede descansar en la ley solamente, sino que se requiere de un enfoque multidimensional para desarrollar políticas adecuadas, tanto en lo social como en lo económico; así como de procesos e instituciones democráticas que permitan que las mujeres expresen sus necesidades y se les atienda.